

La geopolítica del Plan Colombia  
Por James Petras \*

## INTRODUCCIÓN

Para poder comprender el Plan Colombia correctamente, debemos ubicarlo en su perspectiva histórica tanto en relación con Colombia como con los últimos conflictos de América Central. El Plan Colombia es al mismo tiempo una política "nueva" y la continuación de la pasada intervención de los Estados Unidos en Colombia.

A principios de los años 60 con el gobierno de Kennedy, Washington lanzó su programa de contrainsurgencia, entrenando a fuerzas especiales diseñadas para atacar a los "enemigos internos". El objetivo era la autodefensa de las comunidades colombianas, particularmente Marquetalia. Posteriormente el Pentágono continuó su presencia en Colombia con mayor o menor intensidad. Por lo tanto, el Plan Colombia es la extensión y la profundización de la guerra interna de Kennedy ahora realizada por Clinton. La diferencia entre la versión antigua de la doctrina de guerra interna y la actual se encuentra en las justificaciones ideológicas de la intervención norteamericana, en la escala y el alcance de su participación y en el contexto regional de la intervención.

Bajo Kennedy la contrainsurgencia se basaba en la amenaza del comunismo internacional y hoy la justificación se encuentra en la amenaza de la droga. En ambas instancias existe una negación total de la base histórica y sociológica del conflicto.

La segunda diferencia fundamental entre el Plan Colombia de Clinton y el programa de contrainsurgencia de Kennedy es la escala y el ámbito de la intervención. El Plan Colombia es un programa de miles de millones de dólares a largo plazo que incluye el envío de armamento moderno a gran escala. En cambio, la agenda de contra insurgencia de Kennedy era mucho más pequeña. La diferencia en la escala de la operación militar no se debe a diferencias estratégicas o políticas; la causa se encuentra en el diferente contexto político de Colombia y el mundo: en los años 60 las guerrillas eran grupos pequeños y aislados, hoy son un ejército formidable que opera a escala nacional. En ese momento Kennedy se concentraba militarmente en Indochina, mientras que hoy Washington se encuentra con las manos relativamente libres. El Plan Colombia es entonces la continuación y el aumento de la política militar de los EEUU basada en objetivos estratégicos similares adaptados a la nueva realidad mundial.

El segundo factor histórico que debe tomarse en cuenta al discutir el Plan Colombia se refiere a los conflictos regionales recientes como la intervención norteamericana en América Central. El Plan Colombia está muy influenciado por la exitosa reafirmación de la hegemonía de Washington en América Central, como continuación de los llamados "acuerdos de paz". El éxito de Washington en América Central se ha basado en el uso del terrorismo de estado, el desplazamiento masivo de la población, los gastos militares a gran escala y a largo plazo, en los asesores militares y la oferta de un arreglo político que implica la reincorporación de los comandantes guerrilleros a la política electoral. El Plan Colombia de Washington se basa en el éxito obtenido en América Central y su creencia en que puede obtener el mismo resultado en Colombia. Washington cree que puede repetir la fórmula de terror por paz de América Central con el Plan Colombia en el país andino.

A continuación realizaré un análisis de los intereses geopolíticos y las preocupaciones ideológicas que guían al Plan Colombia, las consecuencias de la escalada militar de EE.UU y una crítica del diagnóstico equivocado que realiza sobre la "cuestión colombiana". El informe concluirá con un debate sobre algunas de las consecuencias adversas imprevistas en las que Washington puede caer en la consecución de su política militar en Colombia.

EL PLAN COLOMBIA Y EL TRIÁNGULO RADICAL

El Plan Colombia es descrito por sus críticos básicamente como la política creada y promovida por EEUU para eliminar militarmente a las fuerzas de la guerrilla de Colombia, reprimiendo a las comunidades campesinas que la apoyan. Los políticos norteamericanos describen al Plan Colombia como un esfuerzo para erradicar la producción y el comercio de drogas que se encuentran en las zonas controladas por la guerrilla. En vista de que a la guerrilla se la asocia con las regiones productoras de coca, se desarrolla esta línea de argumento, mandando Washington a sus equipos de asesores militares para destruir lo que ellos llaman las "narco guerrillas." Recientemente y en particular con el éxito político y militar de los dos principales movimientos guerrilleros - las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Washington admite cada vez más el hecho de que esta guerra se dirige contra lo que ahora se llama la insurgencia guerrillera. Mientras que los activos económicos son sustanciales en Colombia, tanto para Washington como para la oligarquía gobernante en Bogotá, el asunto más grande y más importante del crecimiento rápido y masivo de la intervención militar de US en Colombia es geopolítico.

Los estrategias de Washington están preocupados con varios temas geopolíticos claves que podrían afectar adversamente al poder imperial de EEUU en la región y alrededores. El asunto de la insurgencia colombiana es parte de una matriz geopolítica que está en camino de cuestionar y modificar la hegemonía norteamericana en el norte de Sud América y en la zona del Canal de Panamá.

En segundo lugar, el factor de la producción, suministro y precio del petróleo se enlaza con este cuestionamiento en la región y alrededores (en la OPEC, México, etc.).

En tercer lugar, el foco de los conflictos con el imperio se encuentra en Colombia, Venezuela y Ecuador (el triángulo radical) pero también existe un creciente descontento izquierdista y nacionalista en países vecinos claves, especialmente en Brasil y Perú.

En cuarto lugar, el ejemplo de la exitosa resistencia de los países del triángulo radical ya está resonando en países más al sur - Paraguay, Bolivia, sobre la base de luchas políticas triunfantes realizadas por los movimientos de indígenas-campesinos en las zonas montañosas ecuatorianas o por las "apelaciones Bolivarianas" del Presidente Chaves de Venezuela y a la siempre presente conciencia nacional populista de Argentina.

En quinto lugar, la fuerza del triángulo radical y en particular la diplomacia del petróleo y la política de independencia del Presidente Chaves ha echado por tierra la estrategia norteamericana de aislar a la revolución cubana e integrar a Cuba en la economía regional. Más aun, los beneficiosos acuerdos con el petróleo (comercio a precios subsidiados) ha fortalecido la decisión de los regímenes centroamericanos y caribeños de resistir los esfuerzos de Washington para convertir al Caribe en un lago exclusivo de los norteamericanos.

Mientras que las guerrillas y los movimientos populares representan un serio reto político y social para la supremacía norteamericana en la región, Venezuela representa un reto diplomático, económico y político en la cuenca del Caribe y alrededores, mediante su liderazgo en la OPEC y con su política externa no alineada.

En términos más generales, el triángulo radical puede contribuir a minar la mística de la hegemonía invencible de los EEUU y la idea de que la ideología del libre mercado es inevitable.

En términos más específicos el conflicto entre el triángulo radical y el poder imperial norteamericano centra la atención en el hecho de que mucho de lo que se describe como "globalización" se apoya en los cimientos de las relaciones sociales de producción y el equilibrio de

las fuerzas de clase en el estado-nación. El reconocimiento de este hecho tiene una importancia especial en el conflicto EE.UU-FARC en Colombia. La hipótesis aquí es que sin una sólida base social, política y militar dentro del estado-nación, la empresa imperial y las redes globales que la acompañan están en peligro. En consecuencia es necesario observar más de cerca la naturaleza de esta guerra de representación en Colombia en la que Washington mediante su régimen clientelar intenta destruir a las guerrillas y diezmar y desmoralizar a sus simpatizantes con el objeto de restaurar los cimientos locales del poder imperial.

## LA GEOGRAFÍA DEL DESAFÍO A WASHINGTON

En los años 60 y 70 el desafío al poder imperial de EEUU se encontraba en el Cono Sur de América Latina - es decir, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. Washington respondió respaldando a los golpes militares y el terrorismo de estado para derribar gobiernos y aterrorizar a la oposición popular y lograr su sometimiento. Durante los años 80, América Central se convirtió en la pieza central del desafío revolucionario al poder imperial norteamericano. La revolución nicaragüense, los movimientos de la guerrilla popular en El Salvador y Guatemala representaron un reto serio para los regímenes clientelares norteamericanos y los intereses geopolíticos y económicos. Washington militarizó la región invirtiendo miles de millones en armas, financiando un ejército mercenario en Nicaragua y la actividad militar terrorista de estado en El Salvador y Guatemala. La guerra de desgaste realizada por Washington finalmente impuso varios acuerdos de paz que restauraron los regímenes clientelares y la hegemonía de EEUU al costo de más de 200.000 muertos en Guatemala, 75.000 en El Salvador y al menos 50.000 en Nicaragua.

A fines de los años 90 y ya en el nuevo milenio, la geografía de resistencia al imperio norteamericano se trasladó al norte de Sudamérica - es decir, Colombia, la zona montañosa oriental de Ecuador y Venezuela. En Colombia, las fuerzas combinadas de la guerrilla controlan o tienen influencia sobre una amplia banda de territorio al sur de Bogotá hacia la frontera ecuatoriana, en el noroeste hacia Panamá y en varios bolsillos hacia el este y oeste de la capital, además de unidades de milicia urbana. Paralelamente al movimiento guerrillero, las movilizaciones de campesinos y sindicatos convocaron huelgas generales que han sacudido al régimen de Pastrana. En Venezuela el liderazgo de Chaves ganó varias elecciones, reformó las instituciones del estado (Congreso, Constitución, Poder Judicial) y ha tomado una posición independiente en política externa - llevando a que la OPEC aumente el precio del petróleo, desarrollando lazos con Irak, extendiendo lazos diplomáticos y comerciales con Cuba, etc.

En Ecuador un poderoso movimiento indígena-campesino (CONAIE) en unión con oficiales militares de bajo rango y con sindicalistas, tumbó el régimen de Noboa en enero de 1999 y mientras los militares intervenían para derribar a la junta popular, el CONAIE y sus aliados barrieron en las siguientes elecciones legislativas en la sierra ecuatoriana. Como resultado, la estrategia militar del Pentágono de rodear a las guerrillas colombianas mediante la construcción de una base militar en Ecuador (Manta) está siendo seriamente amenazada. En estos tres países los movimientos armados y civiles y el régimen de Chaves han puesto en cuestión el intervencionismo de Washington y su promoción de la agenda económica neoliberal.

La resistencia en estos tres países tiene lugar en una zona que es rica en petróleo; Venezuela es un importante proveedor de los EEUU, Colombia es un país productor y posee importantes reservas sin explotar, al igual que Ecuador, si bien en menor escala. Por lo tanto, el asunto del petróleo es una hoja de doble filo; un estímulo para una política intervencionista agresiva de EEUU (como el Plan Colombia, la intervención contra la junta popular ecuatoriana) y una palanca de poder para desafiar la dominación norteamericana, como ha demostrado Chaves.

El Plan Colombia está inserto en la matriz geo-económica del triángulo rico en petróleo del norte de Sudamérica, un recurso estratégico para alimentar al imperio así como un recurso económico que puede permitir a los nacionalistas desafiar cualquier boicot y financiar a aliados potenciales.

El Plan Colombia es también una estrategia para contener y minar el atractivo que representa el avance revolucionario colombiano para otros países latinoamericanos. La existencia de las FARC, el CONAIE y el régimen de Chaves en los territorios adyacentes se apoyan mutuamente. Mientras que el proyecto nacionalista-populista de Venezuela tiene sus raíces en el revulsivo popular de la corrupción así como la decadencia de sus instituciones políticas y la exclusión de la mayoría de su pueblo, el hecho de que exista un poderoso movimiento social a su puerta protege las fronteras de Venezuela de cualquier política de desestabilización inspirada por EEUU. Igualmente el rechazo del régimen de Chaves de permitir que los aviones de reconocimiento vuelen en el espacio aéreo venezolano para buscar y señalar a las fuerzas guerrilleras, disminuye la presión militar sobre las guerrillas. El hecho de que en Ecuador exista un movimiento indígena-campesino a gran escala que se opone a la militarización norteamericana de la frontera entre Ecuador y Colombia, debilita el esfuerzo de guerra imperial.

La adopción del régimen ecuatoriano de la dolarización de la economía y la construcción de una base norteamericana ha deslegitimizado al régimen en el medio de un creciente empobrecimiento y grandes tensiones socio políticas.

El triángulo radical y el conflicto con el imperio norteamericano puede extenderse a los países vecinos. Perú, un firme vasallo de los EEUU hasta hace poco gobernado por el miembro de la CIA y jefe de la policía secreta Vladimir Montesinos se encuentra en un periodo de inestabilidad ya que los movimientos populares de masas compiten con los políticos neoliberales por el poder e influencia. En Brasil, el Partido de los Trabajadores de la izquierda reformista ha ganado varias elecciones municipales importantes incluida la municipalidad de Sao Paulo, mientras que el partido del Presidente Cardoso continua en su espiral descendiente. Más importante es el Movimiento de los Sin Tierra (MST) que continua organizando y ocupando grandes fincas agrarias y resisten la represión del estado en zonas del campo tensas y conflictivas. Mas al sur, importantes movilizaciones campesinas y urbanas con una frecuencia creciente han paralizado las economías de Bolivia y Paraguay, mientras que en Argentina, las provincias se encuentran en un estado de revuelta continua, cortando rutas y atacando a las instituciones políticas municipales. Este es el contexto de la creciente movilización continental en el que el Plan Colombia debe verse como un intento para descabezar a la oposición más avanzada, radicalizada y bien organizada a la hegemonía hemisférica de EEUU.

Hoy el resurgimiento de la polifacética oposición en el triángulo radical ha hecho jaquemate o revertido las políticas norteamericanas al filo de los intereses imperiales. La histórica política de Washington de aislar la revolución cubana de América Latina y el Caribe se ha visto efectivamente resquebrajada. La visita de Chaves y el acuerdo del petróleo consolida las fuentes de energía de Cuba. La conferencia iberoamericana de Panamá en noviembre de 2000 pidiendo la terminación de la Ley Helms-Burton aisló totalmente a los diplomáticos norteamericanos. Los pasos de Washington, cuidadosamente calibrados para debilitar al régimen de Chaves han sido rechazados. La OPEC eligió a un venezolano, Ali Rodríguez, para presidir la organización. Los países caribeños buscaron entusiasmados la firma de beneficiosos acuerdos sobre el petróleo con Venezuela. El conflicto de Oriente Medio ha fortalecido la mano de Chavez para negociar con los EEUU: vean su ataque público al Plan Colombia y las favorables respuestas diplomáticas de Brasil, México y otros países claves.

Washington sigue una estrategia "dominó". El Plan Colombia implica primero la derrota de la guerrilla, luego rodear y presionar a Venezuela y Ecuador antes de moverse hacia el aumento de la desestabilización interna. El objetivo estratégico es lograr la reconsolidación del poder en el norte

de Sudamérica, asegurarse acceso irrestricto al petróleo y aplicar la ideología de "no existe alternativa a la globalización" en el resto de América Latina.

## MANTENIENDO LA MÍSTICA

El Plan Colombia intenta mantener la mística de la invencibilidad del imperio y la irreversibilidad de las políticas neoliberales. La elite en el poder en Washington sabe que las creencias de los pueblos oprimidos y sus líderes son tan eficaces para mantener el poder norteamericano como las demostraciones de fuerza reales. Mientras los regimenes latinoamericanos y la oposición sigan creyendo que no existe alternativa a la hegemonía de EEUU, aceptarán las principales demandas provenientes de Washington y sus representantes en las instituciones financieras internacionales. La creencia de que el poder de EEUU es intocable, de que sus dictados están más allá del alcance del estado-nación (que la retórica de la globalización fortalece) ha sido un factor fundamental en el fortalecimiento del dominio material de EEUU (explotación económica, construcción de bases militares, etc.). Una vez que el dominio de EEUU se pone a prueba y es resistido por las luchas populares en una región, la mística se menoscaba y el pueblo y los regimenes de cualquier lugar comienzan a cuestionar los parámetros de acción política definidos por EEUU. Una vez que se desafía a la mística y el cuestionamiento se extiende sobre el continente, se da un nuevo ímpetu a las fuerzas de la oposición, desafiando las reglas de juego y las normativas neoliberales que facilitan el saqueo de sus economías. Una vez que las normas se cuestionen, el capital siempre temeroso de un resurgimiento de las reformas nacionalistas y socialistas y de los ajustes estructurales redistributivos, empezará a circular. La vuelta a mercados más restrictivos y las limitaciones del riesgo y la disminución de los márgenes de ganancia debilitarán al dólar. La huida del dólar dificultará a la economía norteamericana la financiación del enorme desequilibrio de su cuenta corriente. El miedo a esta reacción en cadena se encuentra en la raíz de la hostilidad de Washington a cualquier desafío proveniente de donde sea que pueda poner en marcha una oposición política extendida y a gran escala.

Colombia es un buen ejemplo. En sí misma la participación económica y política de EEUU en Colombia no es especialmente importante. Pero la posibilidad del triunfo de una lucha de emancipación dirigida por la FARC, el ELN y sus aliados populares podría minar la mística y poner en funcionamiento a los movimientos en otros países y tal vez poner algo de carácter en algunos líderes latinoamericanos. El Plan Colombia trata de evitar que Colombia se convierta en un ejemplo que demuestre que existen alternativas y que Washington se puede vencer.

Más importante, una alianza Cuba-Venezuela-Colombia proporcionaría un poderoso bloque político y económico: la tecnología cubana sobre cuestiones sociales y seguridad, la potencia energética de Venezuela y el petróleo, la mano de obra, la agricultura y la industria colombiana. Las favorables economías políticas podrían ser un polo alternativo al imperio centralizado norteamericano. El Plan Colombia está organizado para destruir la potencial pieza central de esa alianza política: la insurgencia colombiana.

## FRASES VACIAS Y REALIDADES CONCRETAS

El Plan Colombia tiene la virtud de ser una avanzada operación militar dirigida por EEUU para destruir su enemigo de clase con el objeto de consolidar su imperio en América Latina. La retórica antidroga es más para consumo interno, en lugar de ser una guía operativa de acción. Los líderes de la guerrilla y sus movimientos entienden esto y actúan en consecuencia, movilizandolos sus bases sociales de apoyo, asegurando sus pertrechos militares y diseñando una estrategia anti-imperial apropiada. Enfrentados con esta fuerte polaridad político militar, claramente definida por cada adversario, muchos intelectuales académicos y supuestamente progresistas se retraen a abstracciones apolíticas divorciadas de las configuraciones del poder real y la lucha de clases, a

conceptos oscurantistas y abstracciones materializadas. Hablan del Sistema Capitalista Mundial, la Acumulación a Escala Mundial, Derrotas Históricas, la Edad de los Extremos - palabras vacías muy escritas y repetidas como un mantra que no explica nada y oscurece las bases políticas y de clase de los crecientes movimientos antiimperialistas y de lucha de clases.

Dada la importancia estratégica de los sucesos colombianos a ojos de Washington y el potencial que la lucha tiene como filo para cortar la hegemonía de EEUU en América Latina, es importante tener en cuenta que la acumulación de capital norteamericano depende de los resultados de la lucha política dentro de un estado-nación. Además, reconociendo la posición central que ocupa el petróleo como fuente principal de energía para EEUU, una victoria político militar de EEUU en Colombia aislaría a Chaves y facilitaría los esfuerzos para minar a su régimen. Mientras que las FARC/ELN existan como el radical "demonio más grande" (a ojos de Washington), los planificadores de la política norteamericana tienen que moverse cuidadosamente contra la política exterior de Chaves por temor a que el radicalice su política interna en línea con la izquierda colombiana. A pesar de todos sus discursos nacionalistas sobre política exterior, Chaves ha seguido una política fiscal bastante ortodoxa, respetando e invitando a nuevos inversores extranjeros y ha pagado escrupulosamente la deuda externa (e interna) de Venezuela. Por lo tanto Washington ha seguido una política compleja hacia sus adversarios en el triángulo, manteniendo relaciones frías pero correctas con el régimen de Chaves, y al mismo tiempo aumentando drásticamente su apoyo a la guerra contra la FARC/ELN.

#### POLÍTICA MULTI-VIA DE WASHINGTON

Washington está intentando una política multi-via con las diferentes clases de oposición que enfrenta en la región. En relación con Colombia, donde un vasallo de EEUU controla el aparato del estado y las formaciones guerrilleras representan un desafío sistémico, el Departamento de Estado ha declarado la guerra total, la centralización y la expansión de la maquinaria de guerra y la marginalización de las organizaciones populares autónomas en la sociedad civil. Mientras se tolera la zona desmilitarizada en la que se realizan las negociaciones de paz, Washington intenta apretar el cerco militar de la región, controlando militarmente toda la frontera (especialmente la frontera ecuatoriana-colombiana) y preparando eventualmente el ataque militar total sobre la dirección de la guerrilla dentro la zona desmilitarizada.

La estrategia militar norteamericana se ha centrado cada vez más en la expansión y la eficacia operativa de las fuerzas paramilitares. Durante más de una década la CIA ayudó a la formación de grupos paramilitares aparentemente para combatir el cartel de la droga. Durante los últimos tres años, Washington ha escalado el apoyo clandestino a las fuerzas paramilitares a través de la ayuda militar a las Fuerzas Armadas Colombianas y tolero sus actividades con el narcotráfico. Los terroristas paramilitares desempeñan un papel esencial en el Plan Colombia: realizando una agresiva "limpieza social" de activistas campesinos en regiones enteras, sospechosos de simpatizar con la guerrilla. La fuerza, estimada en 10.000 paramilitares, es la "carta" de Washington para hundir las negociaciones de paz y convertir al conflicto colombiano en una guerra total. La táctica de Washington es presionar para lograr la presencia de las fuerzas paramilitares en las negociaciones de paz y luego permitir que Pastrana medie como un centrista entre los dos extremos, imponiendo un arreglo que sostenga el status quo socio- económico. Es muy probable que esto cause la ruptura de las negociaciones y la guerra total.

Washington combina una política a dos bandas con las fuerzas paramilitares: "crítica de papel" en los informes anuales del Departamento de Estado y el apoyo material a gran escala mediante la ayuda militar a los militares colombianos.

Mientras que EEUU sigue un camino casi exclusivamente militar con Colombia (acompañado por pequeños incentivos financieros incorporando a las ONGs al trabajo sobre cultivos alternativos), en

Venezuela Washington intenta evitar precipitar prematuramente una gran confrontación. El Departamento de Estado entiende que el equilibrio de fuerzas dentro de Venezuela son desfavorables para cualquier acción político militar. Chaves ha reformado el poder judicial, ganado las elecciones legislativas, designado funcionarios con mentalidad constitucional y se ha asegurado un sólido apoyo mayoritario entre la población. Los aliados de Washington entre la elite empresarial, los partidos tradicionales y en el aparato de estado no se encuentran en este momento en posición de proporcionar canales eficaces para un esfuerzo desestabilizador dirigido y financiado por Washington. Por ahora la estrategia es realizar una guerra de propaganda basada en la creación de condiciones favorables para una futura desestabilización a gran escala y un golpe cívico-militar. Las tácticas de EEUU son el reverso de su política hacia el régimen colombiano. Contra Chaves, Washington habla sobre los peligros autoritarios de la centralización del poder; el Departamento de Estado promueve una mayor autonomía para sus elites clientelares de la sociedad civil. En Venezuela, Washington busca fragmentar el poder y proporcionar una plataforma en la que reorganizar a los desacreditados partidos tradicionales. Mientras en Colombia EEUU apoya los programas de austeridad de Pastrana y el FMI, en Venezuela Washington se centra en la pobreza de las masas y el desempleo, esperando estimular el descontento popular.

En Ecuador, al igual que en Colombia, Washington respalda firmemente el liderazgo centralista del poder ejecutivo, la represión de los movimientos sociales y la marginalización de la representación opositora en el Congreso. La dolarización de la economía y la concesión de una base militar norteamericana son los más claros indicios de la transformación de Ecuador en vasallo de EEUU.

La política multi-vía norteamericana de confrontación militar (Plan Colombia) a través del aparato del estado y las fuerzas paramilitares en Colombia, la presión diplomática y política mediante las elites de la sociedad civil en Venezuela, la incorporación política y económica del ejecutivo ecuatoriano definen el complejo modelo de intervención.

Es demasiado temprano para realizar un juicio definitivo sobre la política norteamericana multi-vía. En sus estadios tempranos, el Plan Colombia ha llevado a una utilización más agresiva de las fuerzas paramilitares y más bajas civiles pero no a un retroceso efectivo de la guerrilla. En el lado negativo, el creciente deterioro de la economía ha aumentado el descontento de los sectores urbanos y ha debilitado la posición política de Pastrana evidenciado por las fuertes pérdidas en las elecciones municipales de fines del 2000. En Venezuela, el régimen de Chaves está consolidando el poder institucional, consiguiendo apoyo en los sindicatos mediante elecciones libres, reteniendo al mismo tiempo el apoyo de las masas. En Ecuador los movimientos sociales y la coalición aborígen-campesina retiene el poder de movilización, aunque los aliados de Washington hayan triunfado momentáneamente en presionarles con los acuerdos militares y la abierta subordinación de la economía ecuatoriana al Tesoro de EEUU (mediante la dolarización).

#### CONSECUENCIAS DE LA ESCALADA MILITAR DE EEUU.

El Plan Colombia - una típica guerra de baja intensidad (en la que se combinan las armas y la financiación a gran escala de EEUU con la implicación de la infantería de bajo rango) ya ha tenido un impacto de alta intensidad (en campesinos y trabajadores) que está internacionalizando el conflicto. A pesar de los predecibles desmentidos, las agencias militares y de inteligencia norteamericanas han estado activas en la estimulación de las fuerzas paramilitares colombianas para diezmar el apoyo civil, fundamentalmente campesino, de las FARC/ELN en los poblados. Docenas de campesinos sospechosos, activistas comunitarios y otros son asesinados para aterrorizar al resto de la población. Frecuentes barridas paramilitares de las regiones ocupadas por el ejército colombiano asesorado por EEUU ha llevado al desplazamiento de más de un millón de campesinos. El terror paramilitar es parte del repertorio de tácticas contra insurgentes de EEUU, diseñadas para vaciar el campo y negar a la guerrilla apoyo logístico, comida y nuevos reclutas.

Mientras el Plan Colombia escala la violencia, miles de campesinos están huyendo y cruzando la frontera hacia Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil. Inevitablemente los ataques cruzados en la frontera de parte de los paramilitares sobre los refugiados ha extendido el conflicto militar. Los familiares de los activistas guerrilleros que han tenido que huir mantienen sus lazos y contactos. La frontera y los límites se han convertido en zonas de guerra en las que los ocupantes refugiados viviendo en la miseria son partisanos en el conflicto y son objetivos de los militares colombianos.

Más que contener el conflicto civil, el Plan Colombia está extendiendo e internacionalizando la guerra, exacerbando la inestabilidad en las regiones fronterizas con los países vecinos.

El Plan Colombia claramente escala el grado y la visibilidad de la implicación norteamericana en Colombia. Con unos 300 asesores militares y mercenarios subcontratados adicionales que pilotan helicópteros, la implicación norteamericana ha pasado de planificar, diseñar y dirigir la guerra al nivel táctico-operativo. Más aun, los políticos norteamericanos han utilizado su presión financiera para premiar a los oficiales militares colombianos colaboracionistas y maleables y castigar o humillar a aquellos que no responden suficientemente a las directivas o al asesoramiento norteamericano. La percepción (y la realidad) de los colombianos es que el Plan Colombia está transformando una guerra civil en una guerra nacional. No existe ninguna duda de que la elite colombiana y los sectores de la clase media alta están a favor de una mayor y cada vez más directa intervención militar de EEUU. Sin embargo, entre los campesinos la mayor presencia de EEUU significa un mayor uso de defoliantes químicos, y redadas militares, cada vez más agresivas y destructivas para erradicar la coca y otras plantas comestibles y eliminar físicamente a las personas que se encuentran en el camino. El Plan Colombia está transformando una guerra civil en una lucha de liberación nacional. Esta dimensión nacionalista podría proporcionar un apoyo urbano añadido a la lucha de la guerrilla de estudiantes, profesionales y sindicalistas mientras que empuja a los agricultores apolíticos al campo de la guerrilla, para lograr la supervivencia de sus hogares.

El énfasis fundamental del Plan Colombia en una respuesta militar a la insurgencia popular es la militarización de la sociedad colombiana - incrementando la salida al extranjero de los profesionales y otros que escapan de la creciente intimidación causada por las descontroladas fuerzas militares/paramilitares en las ciudades. La colocación de Colombia en pie de guerra intimida al colombiano medio pero también aliena a los colombianos de la clase media baja, sujetos a allanamientos arbitrarios e interrogatorios. La pérdida del limitado espacio urbano donde los colombianos realizan el discurso civil aumentará la actividad clandestina de algunos mientras obligará al retiro de la vida pública a otros. Las demandas sindicales y cívicas se consideran "subversivas al esfuerzo de guerra" por el gobierno, la oposición civil está formada por "quinta columnistas que actúan de parte de la guerrilla". El resultado es un aumento del número de sindicalistas y periodistas asesinados. La intimidación de algunos será acompañada por el rechazo radical del estado por otros.

El Plan Colombia requiere muchos miles de millones (3.500 millones de dólares) del Tesoro colombiano, en un momento en que el gobierno está imponiendo medidas de austeridad y cortes en gastos sociales que afectan adversamente a los grupos de asalariados. Al aumentar los gastos militares de Colombia, el Plan Colombia aumenta la oposición pública al Estado, que al mismo tiempo aumenta la demanda del aparato político/militar de EEUU de incrementar el aparato represivo. Las políticas neoliberales y la militarización del conflicto requiere un Estado centralizado más grande y una sociedad civil encogida y restringida, al menos entre las clases populares de la sociedad civil.

El reforzamiento del Estado y su compromiso para pelear en una guerra de dos frentes - una guerra en el campo con armas, y en las ciudades con las políticas neoliberales de austeridad- no solo profundiza la polarización entre el régimen y la población civil, sino también cada vez más aísla



al régimen y lo hace más dependiente de Washington y de las desarrolladas fuerzas militares y paramilitares en las ciudades y en el campo.

El Plan Colombia tiene muchas consecuencias no intencionadas que lejos de contener el conflicto y construir el apoyo para el régimen, extienden y profundizan el conflicto y aíslan al régimen. Esencialmente esto sucede porque Washington y sus vasallos colombianos, cegados por la inquebrantable búsqueda del poder imperial hacen una lectura falsa del desafío revolucionario.

#### DIAGNÓSTICO DE WASHINGTON: MANÍAS Y HECHOS

Esencialmente el Plan Colombia de Washington funciona en base a tres hipótesis equivocadas 1) una falsa analogía extrapolada de sus victorias en América Central, 2) varias ecuaciones falsas sobre la naturaleza de las guerrillas colombianas y sus fuentes de poder, 3) un énfasis desubicado o enfoque exagerado sobre la droga como base del poder político de la guerrilla.

El desafío al poder que significan las FARC/ELN no se puede comparar con las luchas guerrilleras centroamericanas de los años 80. En primer lugar, existe el factor tiempo, las guerrillas colombianas tienen una trayectoria más larga, acumulando una gran cantidad de experiencias prácticas, particularmente sobre los obstáculos de los acuerdos de paz que fracasan en la transformación del Estado y la reforma estructural en el centro de una propuesta.

En segundo lugar, el liderazgo guerrillero de las FARC está compuesto principalmente por dirigentes campesinos o individuos que han desarrollado profundos lazos con el campo, a diferencia de los comandantes centroamericanos que eran mayoritariamente profesionales de clase media deseosos de retornar a la vida en las ciudades y a una carrera política electoral.

En tercer lugar, la geografía es diferente. Colombia no solo es mucho más grande, la topografía favorece la guerra de guerrillas. Además, la relación guerrilla política-terreno en Colombia es mucho más favorable. Las guerrillas, por su origen social y su experiencia están mucho más familiarizadas con el terreno de guerra.

En cuarto lugar, los dirigentes de la FARC han puesto en el centro de sus negociaciones políticas las reformas socioeconómicas - a diferencia de los centroamericanos que priorizaron la reinserción de los ex comandantes en el proceso electoral.

En quinto lugar, las guerrillas colombianas se auto financian totalmente y no dependen de las presiones y los acuerdos de los apoyos de fuera - como era el caso de América Central.

En sexto lugar, las FARC han pasado por un acuerdo de paz - entre 1984-90 en que miles de sus partidarios y simpatizantes fueron asesinados y no se realizó ningún avance en la reforma del sistema socio económico.

Finalmente las guerrillas han observado la marcha de los acuerdos y no se han impresionado con los resultados; la ascendencia del neoliberalismo, la impunidad de los militares violadores de los derechos humanos o el enriquecimiento de muchos de los ex comandantes guerrilleros, algunos de los cuales se han unido al coro que apoya la intervención norteamericana en Colombia.

Dadas estas diferencias, la política a dos bandas de Washington, hablando de paz y financiando los cultivos alternativos al mismo tiempo que escala la guerra y promueve la erradicación de los cultivos, está condenada al fracaso. La zanahoria de un acuerdo de paz para los comandantes y la guerra de desgaste en la base no llevará a las FARC a aceptar un acuerdo de paz en el que la inserción electoral, la continuidad institucional militar y un neoliberalismo desbocado permanecen inamovibles.

La segunda hipótesis falaz de los políticos norteamericanos es el análisis simplista que realizan de las fuentes del poder de las FARC. Los pensadores estratégicos de Washington igualan a las FARC con el narcotráfico, derivando su fuerza de los millones de dólares que acumulan para reclutar combatientes y a las "tácticas de terror" que practican para intimidar a la población y ganar el control del campo. Las ecuaciones simples: FARC=drogas, drogas=\$\$, \$\$=combatientes, combatientes=terror, terror=crecimiento de control territorial.

Este enfoque superficial carece de dimensión histórica, social y regional, perdiendo de vista completamente la dinámica social de la creciente influencia de las FARC. Primero, ignora el proceso histórico de la formación y crecimiento de las FARC en regiones y clases concretas. Las FARC han llegado a ser una formación guerrillera formidable mediante la acumulación de fuerzas a lo largo del tiempo, no linealmente sino con avances y retrocesos. Los lazos familiares, las experiencias de vivir y trabajar en regiones abandonadas o amenazadas por el Estado han desempeñado un gran papel en reclutamiento y movimiento - construyéndose a lo largo de un periodo de 35 años. Por un camino de pruebas y errores, reflexionando y estudiando, las FARC han sido capaces de acumular gran cantidad de entendimiento práctico de la psicología y las bases materiales de la guerra de guerrillas y el reclutamiento masivo. A través de su historia de defender la reforma agraria y los derechos de los campesinos las FARC han sido capaces de crear cuadros campesinos que conectan a los habitantes de los pueblos y a los dirigentes y comunican en ambas direcciones. Estos lazos históricos y sus experiencias, mucho más que el impuesto al narcotráfico, son el instrumento del crecimiento de las FARC. En realidad, el papel del impuesto a la venta de las FARC está moldeado por su evolución histórica y política y no viceversa. La decisión de cobrar impuestos a los narcotraficantes y reinvertir los fondos en el movimiento - no obstante algunos ejemplos aislados de enriquecimiento personal - revela el carácter político del movimiento. En las zonas bajo control de las FARC no se vende ni se consume droga. Las FARC protegen a los productores campesinos, mientras que los aliados políticos y militares de los EE UU, y sus bancos, comercializan las drogas y blanquean los beneficios.

Socialmente las FARC se encuentran insertas en la estructura de clases, acoplándose con los habitantes de los pueblos y defendiendo los intereses de los campesinos. Las FARC reclutan sus soldados de los campesinos y de los pobres de las ciudades con los que trabajan y con los que en muchos casos tienen relaciones familiares. Hasta el punto en que cuando las depredaciones de los militares/paramilitares destruyen los pueblos, los jóvenes campesinos quedan libres y dispuestos a integrarse al ejército guerrillero. Lo mismo sucede con los programas de erradicación de coca: la destrucción del medio rural crea condiciones propicias para escuchar la llamada a las armas de la guerrilla.

La fortaleza de la guerrilla en las provincias proviene no solo del gobierno de explotación y abusos de las elites económicas sino también de la concentración del gasto del Estado y el consumo en Bogotá y aunque en menor proporción también en las otras ciudades principales. La polarización histórica campo-ciudad ha contribuido a la formación de ejércitos rurales, tanto por los políticos regionales como por la guerrilla. Pero la intervención violenta y arbitraria en el campo de los militares al servicio de la elite política de Bogotá y de los propietarios de la tierra residentes, aumenta la distancia entre la clase política y los campesinos, muchos de los cuales se sienten más cerca de la guerrilla.

Finalmente, los políticos norteamericanos enfatizan en exceso la centralización de los ingresos provenientes de la droga en la guerra de guerrillas. Nadie puede negar que el impuesto a la droga es un factor importante, una fuente de ingresos necesaria para financiar las compras de armas y alimentos. Pero no es de ninguna forma suficiente. Lo que los ideólogos del Plan Colombia ignoran o desvalorizan es la importancia de la lucha de las FARC en la representación de los intereses básicos de los campesinos (tierra, créditos, caminos, etc.), sus llamamientos a la educación política

e ideológica, los servicios sociales y la ley y el orden que proporcionan. En la mayoría de sus tratos con la población rural, las FARC representan el orden, la rectitud y la justicia social. Mientras que el impuesto a la droga compra armas, es esta unión de actividades sociales, políticas e ideológicas la que resuena en el campesinado y atrae a los campesinos a la convocatoria a las armas. La lealtad de clase y las alianzas en los pueblos no se compran con el impuesto a la droga o con las armas. Si fuera así, las fuerzas militares y paramilitares serían fuerzas invencibles! La fuerza de las FARC se basa en el interjuego de los llamamientos ideológicos y la resonancia de sus análisis y las prácticas políticas con la realidad diaria de la vida del campesinado.

Para minar a las FARC, Washington debería cambiar la realidad socio económica, que el Plan Colombia está diseñado para defender.

## RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE UN "DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO"

El Plan Colombia de Washington es el típico ejemplo de un poder imperial volcando armas y dinero para promover a un vasallo leal (el régimen de Pastrana) que cada vez más se apoya en la coerción (las fuerzas militares y paramilitares) y en los aliados económico políticos que se apropian de la tierra, quitándosela a las familias de los campesinos. Los militares reclutan conscriptos con ningún costo para los ingresos militares y entrenan profesionales militares sin ninguna compenetración con la gente (solo lealtad a la jerarquía) y que no tienen familiaridad alguna con el terreno de lucha. Los oficiales están entrenados en el armamento militar de alta tecnología y su principal preocupación es la promoción profesional. En general, el programa de militarización dirigido por EEUU no la levantado la baja moral de los conscriptos o de los oficiales de rangos inferiores. Las tácticas de los militares están dirigidas a los grupos de civiles de los que se reclutan muchos conscriptos. La destrucción a gran escala de cultivos y poblados no es muy atractiva para los reclutas normales - y explica la razón por la cual los militares se apoyan en los asesinos pagados de los grupos paramilitares para llevar adelante la "guerra sucia". El Plan Colombia provoca el miedo y la huida de los campesinos y alguna vez las formaciones paramilitares reclutan a unos pocos entre la juventud desarraigada. Sin embargo, es dudoso, por razones de historia, biografía y antecedentes socio económicos, que las fuerzas paramilitares puedan igualar a las FARC/ELN en conseguir nuevos combatientes.

La continuación y profundización de la guerra y el aumento del aislamiento del régimen está llevando a una mayor implicación de EEUU. En este momento los asesores norteamericanos están enseñando y dirigiendo una guerra de alta tecnología y proporcionando liderazgo operacional en las cercanías de los campos de batalla. Washington está presionando para extender las bases operativas a nuevas regiones y estas guarniciones serán objetivos de las fuerzas guerrilleras. ¿Si las fuerzas colombianas no son capaces de defender las bases avanzadas desde las cuales operan los asesores norteamericanos, esa será la excusa para enviar más tropas norteamericanas para proteger las bases? Esto sería el comienzo de una cadena que llevaría a mayor implicación de EEUU.

Mientras es posible hacerse preguntas sobre el grado y la profundidad de la futura implicancia militar norteamericana, no hay duda de que el Plan Colombia significa la profundización de la guerra y que con seguridad conducirá a minar aun más la economía colombiana. El Tesoro colombiano se vaciará para financiar la guerra, la guerra creciente por aire y tierra provocará un aumento masivo de los refugiados y desestabilizará a las economías regionales (y en última instancia, nacionales) Los campos de refugiados con frecuencia se convierten en semilleros para políticas radicales -las políticas de los desarraigados. Florecerán la droga, el contrabando y otras actividades delictivas, forzando la capacidad de vigilancia de las fronteras de los países vecinos. La historia nos enseña que EEUU no será capaz de mantener los efectos de su guerra fuera de sus fronteras: se producirá otra vez un efecto "boomerang".

## CONCLUSIÓN: EL APOYO EXPLOSIVO

La explosión se refiere a los inesperados efectos adversos de la implicancia de EEUU en las guerras de ultramar. Por ejemplo, el entrenamiento realizado por EEUU de exilados cubanos y de fanáticos islámicos afganos para luchar contra el comunismo llevó a la creación de bandas de narcotraficantes altamente organizadas que suministraron a los mercados norteamericano y europeos y más tarde se involucraron en actividades terroristas, en algunos casos atacando objetivos norteamericanos.

Los grandes narcotraficantes colombianos no son la gente descrita por los jefes antidrogas de Washington y difundidas por los defensores ideológicos del Plan Colombia. Las llamadas narco guerrillas y los campesinos que cultivan coca reciben menos del 10% de las ganancias porque ellos solo producen y gravan la materia prima. Los grandes beneficios provienen del mercado de exportación y del blanqueo de los beneficios de la droga. La configuración real del poder del narcotráfico en cada punto de tránsito al consumidor demuestra que son aliados estratégicos de EEUU en la guerra contrarevolucionaria. Si observamos las rutas de la droga a través del Caribe y de América Central, veremos que pasan a través de importantes regimenes clientelares y que obviamente se mueven con el respaldo oficial.

Lo mismo es cierto para el Sur Asiático y para Oriente Medio. La producción de droga, su procesamiento y transporte sigue una ruta a través de vasallos norteamericanos nuevos o viejos: Afganistán, Burma, las repúblicas ex-Soviéticas-Turquía-Bosnia, Albania-Europa/USA.

Turquía es el centro de todo narcotráfico europeo con la protección activa de los militares turcos y las agencias de inteligencia. Tienen profundos lazos con delincuentes bosnios y albaneses cuyas actividades son facilitadas por el fuerte respaldo político y militar norteamericano de Albania/Kosovo y Bosnia. Con respaldo oficial estos gánsters llevan el negocio de la droga, el tráfico de blancas y de armas.

En algunos casos, los aliados estratégicos de Washington y los vasallos anticomunistas se han divorciado, en muchos casos después haber sido entrenados en armas y suministro por la CIA. Por ejemplo, ex vasallos de la CIA han organizado células terroristas que han bombardeado objetivos como el New York's World Trade Center.

Colombia representa potencialmente un golpe similar. Los traficantes que compran las hojas de coca, procesan la pasta y presentan el producto final (polvo), prácticamente en todos los casos están trabajando con o son miembros de los grupos paramilitares, altos mandos militares, terratenientes y bastantes banqueros y otros respetables capitalistas, que blanquean dinero proveniente de la droga, invirtiendolo en propiedades, construcción, etc. Los beneficios provenientes de operaciones en el extranjero se blanquean en los principales bancos norteamericanos y europeos, como ha sido revelado por investigaciones presentes y pasadas. Los aliados políticos claves de EEUU en Colombia y las influyentes elites económicas de los bancos norteamericanos son los principales jugadores en el narcotráfico, minando la propaganda fundamental ideológica del Plan Colombia de Washington y revelando su verdadera base imperial.

Los narcotraficantes respaldados por EEUU se encuentran hoy promoviendo el abuso de la droga y el delito, que continua plagando las ciudades norteamericanas, especialmente entre los menores. En segundo lugar, la violencia asociada con el narcotráfico crea distorsiones conocidas que sacuden los negocios de ultramar, norteamericanos y europeos. En tercer lugar, al involucrarse en confrontaciones violentas los oficiales narcoparamilitares desestabilizan el clima de inversión, perpetuando la inseguridad e inhibiendo las inversiones a largo plazo. Tan pronto como se vea más claramente la brecha entre la ideología antidroga de EEUU y su conexión con las fuerzas narcomilitares/paramilitares, seguramente creará más descontento interno. Por ahora no hay

perspectivas de un movimiento de oposición a gran escala en EEUU. Pero en Colombia, en Venezuela, Ecuador y el resto de América Latina, que se saben el blanco de la guerra para salvar al Imperio, el avance de la lucha revolucionaria colombiana tendrá grandes consecuencias para el futuro.

### **La Versión petrolera del Plan Colombia.\***

En plena discusión en el Senado de los Estados Unidos de América (USA) sobre la aprobación de los recursos económicos para el Plan Colombia, que contó por una parte con el apoyo de empresas petroleras y armamentistas y, por otro, con el rechazo de importantes organismos no gubernamentales de derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos con el respaldo del gobierno del Reino Unido (UK) lanza una iniciativa para "promover" el respeto de los derechos humanos, por parte de la industria petrolera en países donde llevan a cabo sus operaciones.

En el documento de discusión sobre las posibilidades y los límites de la propuesta, que llamaremos "Iniciativa USA-UK", presentado en la primera reunión celebrada en Washington el 17 de marzo del 2000, el gobierno de los Estados Unidos define de manera velada sus prioridades al considerar "un tema de la política exterior de los Estados Unidos que afecta sus intereses, el entorno operativo de empresas estadounidenses en el sector extractivo". Pareciera estar inmerso aquí el espíritu del "Interés Nacional" que el gobierno de Estados Unidos invocó para evadir reconocidas voces en materia de defensa de los derechos humanos que se opusieron al Plan, por su elevado componente militar y por el temor a que la ayuda al ejército colombiano se desvíe hacia violaciones a los derechos humanos, dado los comprobados vínculos de las fuerzas militares con los grupos paramilitares y por el alto grado de impunidad que se agencia desde la presidencia de la república y los mandos militares.

La Iniciativa USA-UK se propone alcanzar un "Acuerdo Voluntario" sobre temas que consideran "políticamente sensibles y de gran impacto en el entorno operativo del sector extractivo", tales como: "DESARROLLO, GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS". Temas que hacen parte del Plan Colombia al que el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, define como una estrategia integral de paz, de prosperidad y fortalecimiento de la democracia. Pero tanto la Iniciativa como el Plan Colombia socavan la gobernabilidad, desconocen las raíces del conflicto interno colombiano e ignoran la grave crisis de derechos humanos que vive el país y piden aumentar la capacidad de unas fuerzas militares ampliamente conocidas por las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Igualmente la Iniciativa USA-UK y Plan Colombia comparten el ser promovidos por los Estados Unidos para proteger sus intereses.

La Iniciativa USA-UK se propone "potenciar la actuación de los Estados Unidos en tres países claves: Nigeria, Indonesia y Colombia". Países de gran inestabilidad política en los que las empresas petroleras vienen apostándole a la guerra a nombre de proteger sus inversiones. Empresas que el periodista Roland-Pierre Paringaux, en Le Monde Diplomatique califica como "el mejor sostén de regímenes tiránicos" y donde registra el papel de la BP-AMOCO en Colombia, SHELL en Nigeria y MOVIL OIL en Indonesia. Petroleras que enfrentan violentamente los reclamos de la población y trabajadores mediante fuerzas de seguridad pública y privada, de reconocida reputación en materia de violación a los derechos humanos, mientras presionan y logran más beneficios para sus inversiones.

Asimismo, la Iniciativa USA-UK es considerada como "una dimensión importante de la estrategia de los Estados Unidos para trabajar con los gobiernos del país receptor, las empresas y las ONGs, sobre los retos claves de gobernabilidad y desarrollo regionales" en zonas como las del Delta del Níger, Aceh e Irian Jaya (Indonesia) y el sur de Colombia. Este asunto es de gran importancia en el Plan Colombia, tanto por su proyección en la región andina y el continente, con su efecto de desestabilización de la región, como por las perspectivas de entrada en vigor en el 2005 del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas -ALCA-. El Acuerdo de Libre Comercio, liderado

también por los Estados Unidos, exige en primera instancia la liberación de mercados de capitales, comunicación, transporte y energéticos. Estas medidas, aunadas a las de los organismos multilaterales como el FMI y el BID, pauperizarán aún más las condiciones de vida de la población. La ya existente precariedad de las condiciones de vida en la región, ilustrada por los altísimos porcentajes en los niveles de pobreza absoluta, es fuente de conflictos sociales a los cuales no se les da una respuesta adecuada en términos de mejoría de la calidad de vida, empleo, educación y derechos sociales. Así, lo evidencian, los acontecimientos del año 2000 en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, que no cesan.

En la Iniciativa, los gobiernos de USA y UK consideran que "las empresas podrán hablar con una sola voz" a los gobiernos locales respecto de "temas políticamente sensibles (derechos humanos, arreglos de seguridad, transparencia, distribución de los ingresos petroleros, desarrollo regional y el costo para las empresas por la sustitución del gobierno local)". Es de destacar que las 10 primeras empresas petroleras mundiales están presentes en Colombia. Asimismo, es notorio que los gobiernos de los países en donde estas empresas petroleras tienen sus casas matrices, priorizan la actividad comercial inmutables ante el involucramiento de éstas en graves violaciones a los derechos humanos. En el pasado reciente, algunas de éstas empresas han estado involucradas en graves violaciones a los derechos humanos y en actividades paramilitares, a través de servicios de seguridad privados, sin que los gobiernos de los países de sus casas matrices hayan tomado medidas. Es el caso de la BP inglesa que se fusionó con la AMOCO estadounidense para dar paso a la tercera empresa petrolera en el mundo, que cuenta con el respaldo de los gobiernos de USA-UK. Empresa que en el principal yacimiento petrolero colombiano, junto a sus socias, la TOTAL francesa y la TRITON estadounidense, están involucradas en las violaciones de los derechos humanos. Igualmente, las empresas estadounidenses OXY y TEXAS han resultado seriamente comprometidas en las violaciones de los derechos humanos en el departamento de Arauca sobre la comunidad indígena U'WA y la región del Magdalena medio, respectivamente.

No se puede olvidar que estas empresas cuentan con capitales que superan en creces los Productos Internos Brutos de varios países: así por ejemplo en 1.997 la Exxon/Mobil, la Royal Dutch/Shell y BP/Amoco registraban una cifra de venta de 414 billones de dólares americanos, cifra muy superior al Producto Interno Bruto anual de los 950 millones de personas que viven en la India. En ese contexto, ciertamente la capacidad de interlocución y negociación de las autoridades nacionales y, sobre todo, locales, es débil y escasa, quedando estas supeditadas al supragobierno de las gigantescas del petróleo y de la banca mundial.

En la Iniciativa USA-UK se demanda la participación de las ONGs, ya que allí, podrán "amplificar" su voz, y, de esa manera "hacer progresar el objetivo más amplio de los Estados Unidos de apoyar a la sociedad civil en aquellas transiciones democráticas..." En Colombia, el gobierno de los Estados Unidos no está apoyando ninguna transición democrática, lo que está haciendo es internacionalizar el conflicto con su fracasada política antinarcóticos que penaliza con bombardeos y destierro el eslabón más débil de la cadena, los pequeños cultivadores de hoja de coca, mientras deja intacta la estructura mundial del negocio. La estrategia militar inherente al Plan Colombia no va a solucionar el problema del narcotráfico: el negocio se desplazará hacia otros países y regiones y, con ello el conflicto y la desestabilización de la región.

Producto de la discusión del documento de presentación de la Iniciativa USA-UK, realizada el 17 de marzo del 2.000, se elaboró un acta que sirvió de base en las discusiones del 8 del mayo del 2.000. Allí se fija como objetivo "elaborar un conjunto de principios voluntarios que pueden guiar a las empresas mientras buscan prevenir las violaciones a los derechos humanos, que vienen de NECESIDADES LEGITIMAS DE SEGURIDAD EMPRESARIAL". Carentes de fuerza jurídica vinculante y de mecanismos coercitivos de sanción, tales normas voluntarias de conducta parecen estar más destinadas a una operación de imagen pública que a establecer verdaderos diques que permitan

eficazmente impedir que las empresas estén implicadas en violaciones a los derechos humanos y actividades paramilitares.

En la iniciativa USA-UK se plantea que "en los países en desarrollo donde los RECURSOS DEL ESTADO SON MUCHO MÁS LIMITADOS (que en los países desarrollados), el Estado puede solicitar que los actores privados aumenten o reembolsen los costes de la seguridad o puede solicitar que guardias privados de seguridad estén armados y asuman la primera responsabilidad en cuanto a seguridad". El Estado colombiano, no es, un estado limitado en cuanto a "recursos de seguridad". Todo lo contrario, las excesivas fuerzas de seguridad y sus atribuciones que le garantizan un manto de impunidad son el sostén donde descansa la espiral de violaciones a los derechos humanos. Es en las zonas petroleras y de megaproyectos de cualquier índole donde los paramilitares despliegan con mayor intensidad su ola criminal en medio de alta presencia de fuerzas militares estatales, que regularmente tienen nexos con los paramilitares, como lo develan las investigaciones judiciales al respecto. Carlos Castaño el principal jefe paramilitar en Colombia ha manifestado públicamente que algunas transnacionales lo financian.

La Iniciativa USA-UK desconoce la esencia de los conflictos internos que sacuden estos países, resolviendo de manera pragmática la "legítima necesidad de seguridad a sus inversiones", mediante el aumento de fuerzas militares públicas o privadas, que están seriamente comprometidas en violación de derechos humanos: "En países que sufren una guerra civil u otras formas de conflicto, las medidas de seguridad pueden ser más globales, implicando a las fuerzas armadas, la policía y acuerdos más extensos entre las empresas y el gobierno". Es esto lo que vienen haciendo en Colombia. Comprometiéndose cada vez mas en el conflicto interno, la industria petrolera ha pasado de aportar un dólar por barril a hacer acuerdos secretos entre varias empresas y el gobierno por un periodo de tres años, como el de BP-TOTAL-TRITON en el Piedemonte Llanero, en él que a una fuerza privada de seguridad cuestionable en materia de derechos humanos, se sumaba una fuerza pública, igualmente cuestionable, financiada por la BP.

En Colombia, según la iniciativa USA-UK, "algunas empresas tienen arreglos relativos a la seguridad directos, formales, con las fuerzas militares colombianas o bien han logrado unos acuerdos con la empresa petrolera estatal". La Empresa petrolera estatal (ECOPETROL), coordina desde 1.986 fuerzas públicas y privadas para cuidar la infraestructura petrolera a nivel nacional. Fuerza de seguridad que en una década llegó a tener 10.000 efectivos militares a su servicio. La creación de esta fuerza de seguridad corresponde con la década de mayor agresión al sindicato y con la violencia inusitada contra la población en las regiones petroleras como Catatumbo, Magdalena Medio y el Putumayo, que desde que se anunciara el Plan Colombia se ha agravado de manera alarmante. Solo en Barrancabermeja, donde está la principal refinería del país y sede del sindicato de la industria petrolera -Unión Sindical Obrera USO- reportó 45 asesinatos selectivos en Enero de este año, cuando allí se define el actual pliego de peticiones de la USO, cuyo principal punto es la política petrolera. Resulta por lo menos inquietante que en las zonas petroleras convivan fuerzas públicas y privadas de seguridad con paramilitares y narcotráfico.

En el acta del 17 de marzo, sobre la Iniciativa USA-UK, se propone "incluir también mecanismos de vigilancia y auditoría por terceras partes para GARANTIZAR que los acuerdos entre las empresas y los gobiernos no contribuyan a violaciones a los derechos humanos. Sería mas pertinente que tales procedimientos fuesen emprendidos por los gobiernos estadounidense y británico en cooperación con los gobiernos de los países receptores". Es decir, proponen una VEEDURIA en manos de los impulsores de la guerra. Es el gobierno estadounidense que invocando SU INTERES NACIONAL aprobó el Plan Colombia por encima de las recomendaciones de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y WOLA, que presentaron un informe conjunto sobre la grave responsabilidad del gobierno colombiano y las fuerzas militares, en por lo menos los últimos 10 años, en la VIOLACION PERMANENTE Y SISTEMATICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. Informe que abordaremos más adelante.

El acta del 17 de marzo, sobre la Iniciativa USA-UK, plasma lo que viene aconteciendo en nuestro país "...en entornos inestables, las sociedades de seguridad privada pueden tener que ocuparse de temas de seguridad, tales como ocuparse del CONTROL DE PROTESTAS Y MUCHEDUMBRES, coordinando con las fuerzas estatales, ó suministrar una seguridad armada a las instalaciones y al personal". Esta es una de las acusaciones que pesa sobre la BP en el Casanare, donde una protesta de trabajadores contra la empresa fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad mixta, resultando asesinado un manifestante. Será que es legítimo el derecho a la seguridad mas no el derecho a la protesta y a la vida?.

Finalmente en el acta del 17 de marzo, sobre la Iniciativa USA-UK, se plantea. "Asimismo, algunas sociedades de seguridad privada pueden emprender actividades <<de uso dual>> tales como proveer vigilancia aérea simultáneamente para las empresas y para las fuerzas estatales; o bien suministrar seguridad a la empresa y al mismo tiempo servir de contratista privado militar para el gobierno del país receptor". Aquí lo que se pretende es lavar la imagen del nefasto papel del mercenario. Es de destacar que el mercenario Yair Klein, excoronel del ejército israelí, adiestró grupos paramilitares en el Magdalena Medio y operaba a través de una agencia de seguridad privada avalada por el ministerio de defensa de Israel. Grupos paramilitares financiados por gremios económicos y políticos locales fueron organizados por las Fuerzas Militares en el Magdalena Medio, a finales de los años 70s. La TEXAS, dueña del suelo y el subsuelo, facilitó sus instalaciones para celebrar varias reuniones en las que se crearía el grupo paramilitar "Muerte a Secuestradores - MAS". Posteriormente, en los años 80s, los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha se asociarían a estas estructuras paramilitares. También servicios británicos de seguridad privada, contratados por empresas petroleras, han fomentado el uso de mercenarios con conocidos antecedentes criminales, así como los nexos con estructuras paramilitares locales en el Casanare.

Igual acontece con el Plan Colombia. "La administración de Clinton, de forma silenciosa, ha contratado un grupo de alto nivel formado por antiguo personal militar de Estados Unidos, cuyo objetivo excede el simple objetivo de la lucha contra la droga y cuya intención es convertir a las fuerzas militares de Colombia en una máquina de guerra de primera clase capaz de vencer a la insurrección izquierdista de varias décadas". Soyster, portavoz de estos Recursos Militares Profesionales Inc -MPRI-, declaró: "Nos están utilizando para llevar a cabo la política exterior norteamericana. Es cierto que no determinamos la política exterior, pero podemos ser parte del gobierno de los Estados Unidos al llevar a cabo la ejecución de la misma".

Aquí es necesario volver la mirada hacia los orígenes del paramilitarismo en los años 60s del siglo pasado. Nace y se desarrolla como una estrategia de Estado ligada a los grupos de poder económico y político, que han hecho de él un instrumento de lucha contrainsurgente y tuvo sustento legal que obra en distintas disposiciones, resoluciones, reglamentos y directrices de la Fuerzas Armadas Colombianas. Política de Estado que pervive y se recrudece. El Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentado el pasado año ante la Comisión de Derechos Humanos afirma, "la Oficina ha sido testigo de las declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y por consiguiente no es función del Ejército combatirlos".

Llegados a este punto es válido tener en cuenta que otros intentos de seguridad privada en Colombia, como las CONVIVIR, han sido nefastos. Empresas privadas de seguridad que la Organización de Naciones Unidas ha llamado reiteradamente a desmontar, producto de lo cual han sido ilegalizadas, pero a pesar de esto continúan operando.

En este sentido igualmente preocupa que la Iniciativa USA-UK termine favoreciendo el propósito de reconocimiento del terror como actor político, con lo que se perpetua la ya de por sí angustiosa



impunidad. Más aún, cuando desde los grandes medios de comunicación se ha lanzado un proceso de reconocimiento y legitimación social del paramilitarismo.

#### LA NORMA VOLUNTARIA.

La norma voluntaria asume de hecho que es necesario aumentar el poder LIMITADO de los Estados en los países en desarrollo, mediante seguridad pública y privada. Fuerzas de Seguridad que, entre otras, deben respetar la normatividad internacional aplicable en materia del uso de la fuerza y las armas de fuego. E incluye algo insólito. "Cuando los gobiernos receptores son incapaces de suministrar la seguridad adecuada para proteger el personal y las instalaciones de la empresa, puede ser necesario contratar a suministradores de seguridad privada" y continúan "para complementar la seguridad pública", en la que no creen.

Esta "buena voluntad" de las empresas para hacer coherentes en cuanto a seguridad y derechos humanos implica: examinar el historial y reputación de la fuerza pública y privada y las estructuras de aplicación de la ley para culpar a los infractores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Es decir, la propuesta apunta al establecimiento de un "Código de conducta" o un "Código ético", suscrito voluntariamente por las empresas, carente de fuerza jurídica vinculante, sin mecanismo de sanción en caso de violación. Ciertamente, las empresas se comprometerían a observar las normas internacionales de derechos humanos, a respetar los derechos humanos, no patrocinar prácticas que atenten contra estos, etc.. Esto es, sin lugar a dudas, un loable propósito. No obstante, dado los involucramientos recientes de varias de estas empresas en graves violaciones de derechos humanos y actividades paramilitares, y dado que las zonas de exploración y extracción coinciden con territorios bajo fuerte control militar y paramilitar en los cuales se cometen violaciones a derechos fundamentales de los habitantes, este tipo de "Códigos de conducta" no parece ser un mecanismo adecuado a la gravedad de la situación. Al fin y al cabo estos "Códigos de conducta" no pasan de ser "acuerdos de caballeros" y no es ilegítima la desconfianza que estos generan, así como la promesa hecha por algunas empresas de no volver en el futuro a estar implicadas en violaciones de derechos humanos y actividades paramilitares, cuando estos hechos no parecen afectar la rentabilidad de sus negocios, sino todo lo contrario.

Mucho más si se toma en cuenta que el gobierno del Presidente Clinton eludió a través de la figura denominada "wayver" los condicionamientos establecidos por el Congreso de los Estados Unidos para el desembolso de la ayuda militar prevista en el Plan Colombia, ignorando la sólida documentación de organizaciones internacionales participantes de la Iniciativa USA-UK, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respecto del incumplimiento por parte del gobierno colombiano de las condiciones relativas a: destitución y procesamiento inmediato ante Tribunales Civiles de los miembros de la fuerza pública comprometidos en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; el combate de los grupos paramilitares y el procesamiento de todos sus miembros, instigadores y colaboradores igualmente por Tribunales Civiles. Incumplimientos corroborados por los informes sucesivos sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El documento "Colombia y la ayuda militar estadounidense" presentado conjuntamente por tres organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y WOLA es contundente en afirmar como:

"En la actualidad, decenas de miembros de las Fuerzas Armadas que han estado involucrados en abusos no sólo continúan en servicio activo sino que están al mando de tropas o realizan tareas de inteligencia y reciben ascensos con regularidad. Incluso cuando la Fiscalía ha presentado una

acusación formal y los soldados en cuestión, según los informes oficiales, se encuentran detenidos, a menudo permanecen de servicio y disfrutan de libertad para entrar y salir del cuartel".

Meses después, Amnistía Internacional, sería enfática en manifestar: "También existen pruebas concluyentes de que los grupos paramilitares continúan operando con el apoyo tácito o activo de las fuerzas armadas colombianas. Existen también pruebas de que personal militar colombiano entrenado por fuerzas especiales estadounidenses ha estado implicado -por acto u omisión- en violaciones graves a los derechos humanos, incluidas masacres a civiles. Según los informes, el equipo militar proporcionado por Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas se ha usado para cometer violaciones de derechos humanos contra civiles. Amnistía Internacional no cree que existan los mecanismos necesarios para garantizar que las futuras transferencias de armas a las fuerzas armadas colombianas no pasarán a las organizaciones paramilitares o no serán usadas por los militares para facilitar violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas paramilitares o sus propias fuerzas"

Amnistía Internacional "teme que las organizaciones paramilitares puedan utilizarse en la estrategia militar que contempla el Plan. Aunque este no les reconoce una función formal, la reciente presencia de estas organizaciones en áreas claves designadas para operaciones militares (departamento de Putumayo y la región del Catatumbo en Norte de Santander) parece algo más que pura coincidencia. La estrategia paramilitar de atacar y eliminar las estructuras de base y organizativas va dirigida a anticipar y prevenir cualquier oposición organizada a la erradicación militar de los cultivos ilícitos".

Sumado esto al papel fundamental que en el marco del Plan juega la inversión extranjera "en la construcción de un aparato productivo moderno", según las palabras del propio Presidente Andrés Pastrana ante el Congreso de la República, y, el particular interés de las Empresas Multinacionales del Petróleo de aprovechar las ventajas que les otorga el Plan para ensanchar su papel en el negocio, resulta poco viable pensar que tales empresas en términos de la Iniciativa USA-UK asuman efectivamente su compromiso de propugnar por la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático.

## PAZ DURADERA CON JUSTICIA SOCIAL

¿Será acaso legítimo "proteger la inversión" a costa de aumentar la capacidad represiva de un Estado que se presupone es "limitado" para brindarla, como lo plantea la Iniciativa USA-UK, cuando los hechos, demuestran, que no lo es?

Los grupos económicos nacionales y extranjeros, los organismos multilaterales de la economía, los gobiernos extranjeros y el nacional, deben ser respetuosos de esas voces que desde los sectores sociales y las ONGs colombianas se vienen gestando en pos de una paz duradera con justicia social. Voces que ganan, cada vez más, reconocimiento en el plano internacional, y que, iniciativas como el Manifiesto por la Paz en Colombia, suscrito por un gran número de organizaciones de Europa y las Américas y, por personalidades, le otorga a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y víctimas, un rol fundamental en la construcción del proceso.

Sobre el contenido del Manifiesto, merece destacarse que:

Saluda el interés de la Comunidad Internacional "en la solución política negociada" al conflicto colombiano y propugna por un "replanteamiento" de la política antidroga que "viene afectando a pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana" mientras deja intacta la estructura internacional de un negocio donde no es "exagerado afirmar que la ganancia del narcotráfico

alimenta a gran escala el sistema financiero del norte". Por ello insta a "desnarcotizar" las relaciones con Colombia.

Hace especial mención a la IMPUNIDAD como el "obstáculo más grande para alcanzar la paz".

Les exige a las instituciones financieras internacionales como FMI, BM y BID y a los gobiernos de los países desarrollados reflexionar "sobre sus DECISIONES POLITICAS que muchas veces han aportado a la violencia" y a la pobreza en Colombia.

Solicita en cuanto a ayuda militar "CANCELAR LA EXPORTACION DE ARMAS" y "suspender toda cooperación en materia de formación militar" dado que "la vinculación de altos mandos militares en graves violaciones a los derechos humanos y conformación de grupos paramilitares exige tomar en cuenta que cualquier cooperación en este sentido puede ser utilizada para la violación de los derechos humanos o como contribución a su impunidad".

Exhorta a los gobiernos de los países desarrollados a "exigir a las empresas multinacionales presentes en Colombia el no propiciar la conformación de ejércitos privados para seguridad de sus intereses, ni enviar expertos extranjeros de dudosa reputación sobre la materia".

\*Cesar Carrillo y Freddy Pulecio

Comisión Internacional de la Unión Sindical Obrera USO Europa.